

Protección de la Seguridad Ciudadana, por lo que, con esta fecha he acordado la incoación de expediente sancionador de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, encargándose de la Instrucción del expediente administrativo, la Jefe de Sección Administrativa de esta Delegación del Gobierno D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Dolores Padillo Rivademar, todo ello a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el art. 42.3 de la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12 de 14 de enero de 1999) el plazo para la resolución de este expediente será de tres meses, transcurridos los cuales se considerará caducado el procedimiento.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (B.O.E. n.º 189, de 9 de Agosto) y a los efectos que en el mismo se determinan, se le traslada la Propuesta de Incoación de expediente que se ha elevado a S.E. el Delegado del Gobierno, la cual es del tenor literal siguiente:

Con esta misma fecha y conforme a lo ordenado por V.E., se procede a incoar expediente administrativo sancionador a D. Fuat Mustafa Oukada, titular del D.N.I. 45.296.689-S, con domicilio en la calle Colón, bloque D 2.º izqda. Pabellones Militares de esta ciudad por los motivos siguientes: en la madrugada del día 13/05/01, le fue requerida en un control policial de identidades, la documentación personal al reseñado, quien manifestó que carecía en ese momento de documentación personal; se estima que los hechos pueden suponer una infracción artículo 17 b) del D. 196/76 en concordancia con la Ley Orgánica 1/92, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y sancionada según artículo 17.d) del Decreto anteriormente citado con multa de 1.000 a 10.000 pesetas.

Al mismo tiempo se le comunica que el órgano competente para la Resolución del expediente es S.E. el Delegado del Gobierno, según determina el art. 17.d) del Decreto 196/76 que regula el D.N.I.

Se le comunica que de conformidad con el artículo 16.1, del Real Decreto 1398/93 anteriormente citado, tiene Vd., un plazo de Quince Días, a partir de la recepción del presente escrito, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime

convenientes, y en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, teniendo a su disposición el expediente para ser examinado, significándole que en caso de no hacerlo, dicha Propuesta de Incoación podrá ser considerada Propuesta de Resolución, tal y como establece el art. 13.2 de la dicta norma y con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 siguientes.

La Jefa de Sección de Gestión Administrativa.

M.<sup>a</sup> Dolores Padillo Rivademar.

#### DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA SECRETARÍA GENERAL

**2138.- DILIGENCIA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE:** Vista la denuncia formulada por la Comandancia de la Guardia Civil de esta Ciudad, con n.º 7133 y fecha 18/05/01, por la que da cuenta a esta Delegación del Gobierno de D. Mohamed Mustafa Mohamed, con D.N.I. núm. 45.290.832, y con domicilio en la calle Canteras del Carmen calle C, n.º 27, de esta Ciudad porque sobre las 21.30 horas del día 11/05/01, funcionarios pertenecientes a la citada Comandancia que prestaba servicio en el Control Fronterizo de Mari Guari de esta Ciudad proceder a la identificación y cacheo del reseñado, que procedente de Marruecos pretendía entrar en Melilla, le fue hallado al mismo oculto en el interior del bolsillo de la camisa que vestía la cantidad de siete cigarros (porro) de grifa con un peso de 5.23 gramos, manifestando la misma la había comprado en Marruecos y era para su consumo, dicha sustancia ha sido pesada así como confirmada por el Área Funcional de Sanidad de esta Delegación del Gobierno, remitido mediante análisis n.º 170/01 de fecha 22 de mayo; se estima que los hechos pueden suponer una infracción tipificada como grave en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/92, de 21 de febrero, modificado por la Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto. Por lo que, con esta misma fecha, he acordado la incoación de expediente sancionador de conformidad con lo previsto en el art. 13 del Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, encargándose de la Instrucción del expediente administrativo, la Jefe de Sección Administrativa de esta Delegación del Gobierno D.<sup>a</sup> M.<sup>a</sup> Dolores Padillo Rivademar, todo ello a los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el art. 42.3 de la Ley 4/99, de 13 de enero (B.O.E. n.º 12 de 14 de enero 1999) el plazo para la resolución de este expediente será de tres meses, transcurridos los cuales se considerará caducado el procedimiento.

El Delegado Acctal. del Gobierno.

Francisco Avanzini de Rojas.

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/93, de 4 de Agosto, por el